



UNIVERSIDAD DE CUENCA

RESUMEN.

En el presente trabajo se hará un análisis del Art. 76 de la constitución del 2008 y del debido proceso, entendiéndole al Debido proceso como el conjunto de Garantías que buscan asegurar al ciudadano una recta y cumplida administración de justicia, además se analizará cada uno de sus numerales e incisos en los cuales se sustentan garantías como: la obligación a las Autoridades administrativas y Judiciales garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; la presunción de inocencia de toda persona; a no ser juzgado por actos que no estén tipificados como infracciones, sanciones, ser juzgados por Jueces competentes, y con observancia del trámite propio de cada procedimiento; las pruebas que se obtiene con violación o la Ley carecerán de eficacia probatoria; aplicar lo más favorable a la persona infractora; nadie podrá ser privado del derecho a la defensa; contar con el tiempo y los medios necesarios para su defensa; ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones; todos los procedimientos serán públicos; nadie podrá ser interrogado sin la presencia de un abogado, ser asistido gratuitamente por un traductor; ser asistido por un abogado o defensor público; NON BIS IN IDEM; obligación de los testigos y peritos a comparecer ante el Juez.

PALABRAS CLAVES.

Debido Proceso.

Constitución.

Derechos.

Garantías.

Protección.

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

INDICE.

RESUMEN

DELIMITACION I ORIENTACION DEL CONTENIDO DE LA INVESTIGACION

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EXPLICATIVA

HIPÓTESIS, PROBLEMAS O TEMÁTICAS

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

RECURSOS

PRESUPUESTO

CRONOGRAMA

BIBLIOGRAFÍA

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA.

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES.

ESCUELA DE DERECHO.

“ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN DEL 2008”.

PROYECTO DE INVESTIGACION PREVIO A LA
OBTENCION DEL TITULO DE ABOGADO DE LOS
TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA Y
LICENCIADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES.

Autor:

Wilson Fabian Velecela Espinoza.

Director:

Manuel Orellana Cabrera.

CUENCA-2010.

AUTOR:
WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

ANALISIS DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCION DEL 2008.

DELIMITACION Y ORIENTACION DEL CONTENIDO DE LA INVESTIGACION.

Lo que trataremos es de hacer una delimitación del tema, el mismo consiste en un proceso de **clarificación, determinación, explicación**, hasta llegar a un grado tal de especificidad que resulte ser claro, preciso y operacional.

Debemos señalar el periodo de ocurrencia del fenómeno que se estudiara y el lugar, institución o área geográfica en que se hará el estudio; la determinación y delimitación del tema de investigación lo haremos basándonos en la reflexión sobre la experiencia y conocimiento que se tenga sobre el problema.

El tema es Análisis del artículo 76 de la Constitución del 2008.

Haciendo una clarificación, determinación, explicación, para que el tema resulte claro, preciso y operacional, entonces decimos que se va hacer.

Un análisis es decir un examen de las palabras y frases para determinar una comprensión adecuada del tema.

Se hará una explicación del debido proceso, y como se debe aplicar en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones.

Nuestro estudio se basara en la Constitución de la República del Ecuador del 2008.

Se analizara el capítulo octavo de la Constitución de la República del Ecuador, dentro del cual se encuentran los Derechos de protección.

El análisis se centrara en el artículo 76 de la Constitución de la República, en el cual nos enfocaremos en el Debido Proceso.

Abarcaremos los siete numerales, en los cuales contiene las garantías básicas.

Dentro del séptimo numeral analizaremos los literales que van desde la a) hasta la m).

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION.

Con la expedición de la nueva Constitución Ecuatoriana en la cual se debe reflexionar desde la perspectiva de las nuevas corrientes del Derecho Constitucional denominadas del Neo constitucionalismo. El cual debe ser entendida por nosotros los nuevos profesionales debido a que la constitución ecuatoriana del 2008 se alinea con dicha tendencia y con ello el derecho al debido proceso (Art. 76).

Es de esencial importancia comprender mediante un estudio profundo del derecho al debido proceso, para tratar de lograr una aplicación coherente y razonable de la norma y permitir un procedimiento debido y justo.

Resulta aplicable a las situaciones más diversas, en todo expediente administrativo, proceso judicial, trámite legal, en donde se precautele un mínimo de respeto en los procesos a favor de los individuos mediante principios universalmente reconocidos.

Garantiza el respeto a favor del ciudadano y busca eliminar el ejercicio arbitrario del poder en contra de los individuos pues la sujeción al imperio de la Ley en muchas y reiteradas ocasiones es omitida por los juzgadores en la tramitación de sus procesos, vulnerando las reglas propias de cada procedimiento y dejando en indefensión al administrado o justiciable.

Atraves del presente análisis jurídico busco precisar el contenido y alcance del debido proceso, identificando sus requisitos, reglas, normas y principios en los que se descompone y desarrollarlos a fin de descubrir su particular forma de manifestarse en cada caso.

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

OBJETIVOS.

Reflexionar y comprender sobre el capítulo octavo de la constitución en lo relativo a los derechos de protección en lo que concierne al artículo 76, desde la perspectiva de la nueva corriente denominada Neoconstitucionalismo.

Por medio del presente trabajo se de una concientización social para que todos los individuos conozcan, entiendan y reclamen las garantías jurídicas en relación con las actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del Derecho al Debido Proceso.

Buscar asegurar a los interesados que han acudido a la administración Pública o ante los diversos jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.

Proponer a los profesionales, una defensa de las causas basándonos siempre en el respeto al debido proceso, y aplicación directa del artículo 76 de la Constitución de la República convirtiéndonos así en abogados constitucionalistas y no meramente legalistas.

Detectar si alguna de las garantías básicas dentro de un proceso ya sea judicial o administrativo, es inaplicable en la práctica.

El debido proceso establecido en la constitución en el capítulo octavo, Derechos de Protección, artículo 76; articulado que debe contar con el suficiente estudio y análisis para ser interpretado y ejecutado de una manera óptima por la administración de pública, por los magistrados y jueces y estar al servicio de los administrados y justiciables

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

FUNDAMENTACION TEORICA O EXPLICATIVA.

Art. 76 “En todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas”

Tiene como fuente de origen en la Carta Magna expedido en Inglaterra por el Rey Juan sin tierra en el a... 1215. “due process of law” entendido como el principio de contradicción o principio de audiencia.

Jorge Horacio conceptualiza al debido proceso como “una serie gradual, progresiva y concatenada de actos jurídicos procesales, cumplidos por órganos predispuestos, y por particulares que intervienen voluntariamente o coactivamente en el de conformidad a las normas procesales, para la efectiva actuación del Derecho Sustantivo vigente, en el caso concreto planteado”¹

Devis Echandia define la debido proceso “ como la rama del Derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos y por tanto fijan en los casos concretos, y que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla”²

Para Couture el debido proceso “Es una garantía Constitucional que consiste en asegurar a los individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso en que juzga su conducta, con razonables oportunidades para la exposición y prueba de mas derechos “

De lo expuesto podemos deducir que el Debido Proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar al ciudadano que ha acudido a la función judicial, recibir de esta una recta y transparente administración de justicia. En consecuencia el debido proceso es un derecho fundamental, susceptible de ser protegido sus derechos por medio de la acción de tutela.

¹ HORACIO Jorge, Revista Iberoamericana de derecho Procesal Garantista, Pág. /, 2008

² ECHANDIA Devis, Teoría general del proceso. Tomo i, 1993.

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

En cuanto a lo que se manifiesta en este numeral; que se asegurara el debido proceso en sus garantías mínimas y básicas es aplicable a TODO PROCESO, los procesos en que se resuelvan los derechos y determinan obligaciones de todo ser humano deben contar con mínimos de respeto al proceso que permitan entender que es debido.

Entonces decimos que la noción del debido proceso se encuentra constitucionalizado para TODO proceso, respondiendo a la necesidad de que este principio resulte aplicable a las situaciones mas diversas, es decir en todo expediente administrativo, proceso judicial, trámite leal, etc.

1. “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de la normas y los derechos de las partes”.

En este inciso obliga a todas las autoridades administrativas y las juezas y jueces a aplicar y garantizar en los procedimientos los derechos reconocidos en la Constitución, Tratados internacionales y la Ley y su efectiva aplicación a los casos concretos. Es obligación de los operadores de justicia y autoridades administrativas velar por la validez del proceso y dirigir el mismo conforme a la normativa preestablecida.

Entonces cuando surja una controversia debe existir una normativa jurídica anterior que regule, limitando los poderes del Estado y estableciendo el respeto del los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, si no deben sujetarse a los procedimientos señalados en la Constitución, tratados Internacionales, la ley y los reglamentos.

2. “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario”

El debido proceso es una garantía establecida para que no se atropelle la dignidad humana ni sus derechos fundamentales. El estado jurídico de inocencia, es un elemento esencial del garantismo procesal.

Luis Cuesta, (citado por Raúl Cárdenas Rioseco) manifiesta que “ la presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a categoría de derecho humano fundamental que posee su eficacia en un doble plano; por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

trato de no autor o no participe en hechos de carácter delictivo o análogos a estos y por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba”³

El código Procesal Penal establece en sus etapas la condición de las personas; en la indagación previa sospechoso y disponiendo la reserva del proceso a las partes; en la Instrucción Fiscal imputado y en la Etapa de juicio acusado.

La naturaleza jurídica de la presunción de inocencia es 1.- una garantía básica del proceso penal, 2.- una regla del tratamiento del imputado, 3.- una regla de juicio del proceso y 4.- una presunción *Iuris Tantum*.

Por medio de la actividad probatoria practicada dentro de un proceso en el que se respeten todas las garantías del debido proceso tanto más que el debido proceso es un conjunto de normas que regulan las garantías y derechos con los que debe contar toda persona que es sometido a un proceso, de tal manera que cumpliendo con esta garantía constitucional se desvanece la presunción de inocencia.

3 “ Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, que al momento de cometerse, no este tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara una sanción no prevista por la Constitución o la Ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”

En este numeral hace referencia al **principio de Legalidad**; ósea que las actuaciones tanto de los de los particulares como de los servidores públicos, se encuentren reglamentadas.

También encontramos al **principio de tipicidad**; el que establece que no solo las faltas disciplinarias deben estar descritas en una norma previa sino que, además, la sanción debe estar predeterminada. Es común que por parte de la administración pública se establezcan reglamentos, acuerdos, o decretos que determinen actuaciones u omisiones como infracciones.

Las sanciones que van a ser impuesta a cualquier ser humano deben estar establecidas en una norma con rango de ley, y deben guardar concordancia con la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos por el Ecuador.

³ CARDENAS RAÚL, “La presunción de inocencia”, Editorial Porrúa S:A; 2da edición. Pág. 23, 2006.³³

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

La competencia es la medida dentro de la cual, la referida potestad (jurisdicción), esta distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las personas y de los grados. Entonces decimos que la regulación de la competencia, de donde tenemos que existen varios jueces con la misma facultad jurisdiccional pero con distinta competencia ya territorial, en razón de los grados, personas, o materia.

La competencia nace de la Ley, es la idoneidad jurídica; una norma de menor rango de Ley no puede crear o modificar la competencia, ni tampoco es factible que un órgano público asuma competencia por su propia cuenta.

Decimos entonces que las personas tenemos el derecho a ser juzgados por un juez competente y no por un juez incompetente, con sujeción al trámite preestablecido para el efecto; La violación a este precepto está grave que la ley la sanciona con la nulidad absoluta de todo lo actuado.

4 “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la Ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”.

Dentro de un proceso la prueba debe ser debidamente pedida, presentada y practicada para tener validez en el proceso, en consecuencia debe ser oportuna para tener eficacia jurídica y poder llevar al juzgador o administrador al conocimiento real de los hechos.

La prueba como unidad y función de interés general no debe utilizarse para ocultar o deformar la realidad que puede inducir al juzgador o administrador al engaño, sino debe estar sujeta a principios de lealtad, probidad y veracidad.

Decimos que la prueba tiene como objeto el hecho o los hechos de cuya existencia o inexistencia a de convencer al juzgador o administrador. Por ello se determina la nulidad de pleno derecho de las pruebas que vulneran garantías constitucionales o derechos fundamentales en su obtención que tiene el nombre doctrinario de “prueba ilícita”

Se trata de una nulidad constitucional **ipso jure** o de efectos inmediatos que dejan sin vigor legal una prueba recaudada con violación del debido proceso público o sea obtenida por encima o con desconocimiento de las garantías procesales a que tiene derecho todo acusador. Por ejemplo, un allanamiento no autorizado por autoridad judicial no competente.

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

5- “En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes por un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se aplicara en el sentido mas favorable a la persona infractora”.

Este numeral hace efectivo el principio **pro homini**, en virtud del cual se coloca a la persona humana como valor superior y primero, hace efectiva la concepción antropocéntrica de la Carta Magna.

En materia de **ius puniendi** del Estado, establece la obligación de las autoridades administrativas y de las juezas o jueces de aplicar a un mismo hecho la misma sanción menos rigurosa, aun si la aplicación es retroactiva de la Ley.

Cuando exista duda en normas sancionadoras se dispone en aplicar en un sentido mas favorable del infractor haciendo efectivo el principio **in dubio pro reo**.

“no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y la responsabilidad del sindicado” esto supone que previamente se ha llevado a cabo el debate contradictorio de las pruebas conforme al derecho probatorio, si al final, el caso arroja duda, este debe resolver a favor del sindicado con su absolución.

6 “La Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”.

Establece que la infracción y sanción se acomoden a criterios objetivos y el derecho de todo ciudadano a esperar que el ordenamiento punitivo este regido por criterios de justa proporcionalidad evitando que la autoridad disponga de su discrecionalidad de forma arbitraria.

La proporcionalidad obliga al juzgador o administrador en un proceso a lo siguiente:

- 1.- Que los hechos imputados se encuentre previamente calificados.
- 2.-..Que el hecho sancionado este plenamente probado.
- 3.- Que en el ejercicio de la potestad de sancionar se pondere las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la debida y necesaria proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida.

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

7.- “El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías”.

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.

RAMOS MENENDEZ, define al derecho a la defensa como “...el derecho a defenderse en el juego de la contradicción. Es en realidad un derecho a mantener la postura procesal de parte acusadora o acusada.”⁴

El procedimiento administrativo o judicial tiene diferentes actos procesales en sus etapas e instancias. Esta norma constitucional permite a los administrados y justiciables ejercer su derecho a la defensa en igualdad de condiciones en todos los actos que se lleven a cabo un proceso.

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.

En todas las actuaciones procesales, la ley tiene que establecer los términos oportunos y adecuados para una adecuada defensa. El trámite previsto para un procedimiento debe disponer del tiempo indispensable para conocer los hechos e impugnaciones que se le formulan y en consecuencia para poder defenderse de ellas; el derecho a disponer de un plazo razonable para preparar sus alegatos y formalizarlos, y para promover y evacuar las correspondientes pruebas.

Se debe contar con términos procesales entendiéndoles como un lapso o periodo de tiempo previsto para un fin o actividad inherente al proceso, que por regla general debe practicarse en días y horas hábiles y solo por excepción no, en casos permitidos por la ley.

Entre los variados términos encontramos, términos para contestar la demanda, para presentar pruebas, para formular alegatos, para sentenciar, para interponer recursos, etc.

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.

La igualdad ante la ley es un derecho de las partes de un proceso, en los diferentes actos procesales que se determinan para un procedimiento se debe permitir alegar y fundamentar los argumentos que justifican las pretensiones y excepciones de las partes.

⁴ RAMOS MENEDEZ, El proceso penal, pp16-18.

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Hace referencia al principio de igualdad procesal, por el que las partes tienen derecho a un idéntico o análogo trato en el acceso a los órganos judiciales, en la oportunidad para su defensa, en el desenvolvimiento del proceso, actuaciones probatorias etc.

En todo régimen de derecho, el sistema jurídico en si, debe ser igualitario accesible para todos los miembros de la sociedad. El adagio latino “Audiatur altera pars” determina que debe oírse a las partes en igualdad de condiciones.

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley, las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.

Se hace referencia al principio de publicidad, en el que todo procedimiento será publico, donde las partes tienen derecho a conocer y acudir a las diligencias. Este principio prohíbe los actos y procedimientos secretos, estableciendo algunas excepciones en salvaguarda de un mas alto interés publico, moral, etc.

El Código Orgánico de la Función Judicial prohíbe la grabación en video de las actuaciones judiciales, y para ciertos casos la ley determina la reserva del proceso; en todos los demás procedimientos, las actuaciones y constancias procesales son públicas y constituyen documentos públicos.

Es indispensable otorgar libertad a las partes para tener acceso a los documentos y actuaciones probatorias aportadas en un proceso con el fin de lograr veracidad y contradicción en el procedimiento.

Los delitos sexuales de violación por ejemplo las actuaciones por excepción son secretas, esto para salvaguardar a la persona afectada; delitos contra la Seguridad del Estado.

Ahora bien, decimos que los procesos deben ser públicos por que en cualquier momento los órganos del Estado, tienen la facultad de revisar la actuación las Juezas o jueces y Tribunales que administran Justicia.

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.

Esta garantía establece que no se puede menoscabar o lesionar las garantías constitucionales en la obtención de un medio de prueba como es el interrogatorio, por que de lo contrario constituye una prueba irregular o ilegal que carece de validez y eficacia probatoria. Constituye una garantía judicial básica al interrogatorio que

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

pretende asegurar su fiel cumplimiento y la aplicación de ese mandato ineludible de asesoría legal.

Se trata de proteger el derecho de todo ciudadano a no autoincriminarse y a la asistencia legal obligatoria para ser interrogado por un juzgador o administrador, y contar con el asesoramiento técnico y especializado de sus derechos.

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o interprete, si no se comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.

En el ámbito procesal podemos decir que el interprete es un perito con especialidad en el conocimiento de idiomas extraños, caracteres anticuados o desconocidos. O que tienen capacidad para examinar a quienes ignoren el castellano a personas mudas que no sepan escribir.

En la constitución establece que los extranjeros tendrán los mismos derechos que los ecuatorianos, entonces si hay desconocimiento del idioma es obligación del Estado de asistirle gratuitamente con un traductor o intérprete, quien es la persona que expresa en una lengua lo que esta escrito o se ha expresado antes en otra.

El código de Procedimiento Civil establece que en los procesos y trámites civiles debe nombrarse un intérprete para que traduzca al idioma castellano, y la omisión del nombramiento provoca la nulidad de la diligencia ya que algunas diligencias es solemnidad sustancial, ejemplo en el otorgamiento de testamentos.

Tanto mas que el inciso segundo del Art. 2 de la Constitución determina que el idioma oficial es el castellano...

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.

Toda persona tiene el derecho de ser representado por un abogado de confianza o defensor público dentro de un procedimiento judicial; para que su patrocinador le asesore y le brinde una defensa técnica y especializada sobre los derechos que le asisten y las acciones y recursos que pueden interponer.

La asistencia de un abogado dentro del proceso, garantiza la protección jurídica y técnica del justiciable, debiendo mantener una comunicación libre y privada con su patrocinador.

El abogado juega un Rol trascendental o protagónico para la vigencia del debido proceso y sus garantías, para la cabal asesoría, planificación de la defensa, correcta

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

formulación de los actos de iniciación e impulso procesal, impugnación oportuna y correcta de las resoluciones judiciales, apoyo permanente y solidario de la actividad del juez, constituyéndose en un efectivo auxiliar de justicia.

La preponderancia de su participación se ve reflejada, en la exigencia legal de que todo petitorio lleve su firma, en su necesaria presencia dentro de actos procesales como audiencias, confesiones, inspecciones, etc.

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecirlas las que se presenten en su contra.

Las partes tienen derecho de presentar y practicar toda la actividad probatoria destinada al administrador o al juzgador para convencer de la realidad de los hechos alegados, recibir información, solicitar todo tipo de probanzas en la forma y tiempo establecido por la ley.

Toda persona goza de las más amplias facultades para justificar las razones o argumentos que considere necesarios para la averiguación real de los hechos que son objeto de prueba en un proceso.

La prueba cumple una función social y jurídica, su importancia radica en coadyuvar a la realización del derecho permitiendo lograr el modo preciso de ser de aquellos hechos dudosos y controvertidos que de otra forma podrían no llegar a ser conocidos por el juez y menos dotarle de convicción para resolver el conflicto.

l) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa o materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.

Ninguna persona puede ser sometida a juicio de cualquier clase que fuere cuando ya ha sido juzgado por el mismo hecho en un juicio anterior. Está íntimamente ligado con la excepción procesal perentoria de la cosa juzgada que abarca el aspecto objetivo y el sujeto pasivo del proceso.

Hace referencia al principio NON BIS IN IDEM es una expresión latina que significa “no dos veces sobre lo mismo”; esta ha sido empleada para impedir una pretensión, resuelta mediante una decisión judicial contra la cual no cabe recurso alguno, sea presentada nuevamente ante otro juez.

Es una garantía que otorga el Estado, a cualquier ciudadano de que no sea juzgado procesalmente de manera indefinida mas de una vez por el mismo hecho que ya fue sentenciado en un proceso anterior, como ya indicamos se le conoce como el principio “Non Bis In Idem” constante en el Pacto de San José en su Art. 8 numeral 4.

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

La Carta Magna reconoce además la Justicia Indígena, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial. Se les faculta aplicar normas y procedimientos propios siempre que no sean contradictorios a la Constitución y Tratados Internacionales y garantiza el respeto de sus decisiones por las instituciones y autoridades públicas.

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer antes la jueza o juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.

El perito es una persona versada en una ciencia arte u oficio, cuyo servicio son utilizados por el pueblo, para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que se requiere de conocimientos especiales científicos o técnicos.

Los testigos y peritos son terceros dentro del proceso imparcial e independiente que por sus conocimientos en los hechos intervienen en un proceso judicial. Los testigos se caracterizan por un concepto de generalidad; el perito por el de especialidad.

El informe pericial es el estudio que realiza el perito sobre el problema encomendado para luego entregar su informe o examen final con sujeción a lo dispuesto en la ley.

El informe pericial constituye un medio de prueba para la justificación de la veracidad de los hechos, por ello se determina la obligación de comparecer ante el juzgador o administrador para responder un interrogatorio y justificar sus razones o argumentos. Pero vale manifestar que el informe del perito puede o no ser aceptado por el juzgador.

Entre las obligaciones que tiene el testigo tenemos a) acudir al llamado del juez, y por regla general a su despacho, a fin de rendir el testimonio solicitado. Por excepción cuando la autoridad encontrare justo motivo, acudirá al domicilio del testigo; o en casos de comisión, deprecatorio, cuando el testigo no reside en el lugar. b) Declarar, esto es, cumplir con la obligación general que tiene todo ciudadano de colaborar con la administración de justicia, en beneficio común, orientado al mantenimiento del orden público, relatando todo lo que conoce sobre el asunto del juicio.

K) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción por comisiones o especiales creadas para el efecto.

Si la competencia se halla regulada con anterioridad a un proceso, se puede evitar el peligro de actuaciones arbitrarias por parte de jueces sin facultad legal para ello, solo si existe un régimen estricto de distribución de la competencia, el ciudadano conoce anticipadamente a que juez debe acudir en busca de tutela de sus derechos.

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Las juezas y jueces están sometidos a la constitución, los Tratados Internacionales y la Ley. Ninguna función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en las juezas o jueces en el ejercicio de sus facultades o atribuciones.

El juez tiene un conjunto de aptitudes jurídicas y cúmulos de conocimientos para ejercer las atribuciones legales conferidas, y debe ser el competente para conocer, procesar y resolver los asuntos que le han sido atribuidos y su actuación será imparcial, respetando la igualdad ante la ley.

Las normas legales sobre la competencia son de orden público por lo que prevalecen sobre la voluntad de las partes, quienes solo por excepción, en casos permitidos restrictivamente, pueden establecerla;

Las normas sobre la competencia constituyen solemnidades sustanciales, comunes a todo juicio e instancia, por lo que su inobservancia provoca nulidad de todo o parte del proceso, e incluso de una sentencia ejecutoriada o firme.

Esta disposición Constitucional guarda una estrecha relación con el Art. 3 del Código de Procedimiento Penal que recoge el principio del Juez Natural que dice “Nadie puede ser juzgado sino por los jueces competentes determinados por la Ley”

Se prohíbe de forma expresa la creación de juzgados o tribunales para un caso concreto, la persona debe ser juzgada por el tribunal preestablecido legalmente para el efecto.

L) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras y servidores responsables serán sancionados.

La motivación es el proceso lógico racional de formación de la voluntad que se puede colegir por la pertinencia de los fundamentos de hecho invocados y las normas de derecho sustento de la resolución.

La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y derecho que han inducido a la emisión del acto, sentencia o fallo. Esta contenida dentro de los considerandos, es la fundamentación fáctica o jurídica del acto, con lo que la administración otorga legitimidad y oportunidad a su decisión.

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Motivación es desarrollar el pensamiento del juzgador a través de las razones que justifiquen la resolución adoptada, de tal manera que exista una relación lógica entre los hechos y el derecho, en definitiva que exista congruencia en su Sentencia.

La motivación debe ser a) Expresa, es decir debe explicar las razones y argumentos relativos al caso. b) Clara, es decir que sea comprensible inteligible. c) Completa, debe abarcar todos los hechos. d) Legítima, debe sustentarse en razones y pruebas legalmente válidas. e) Lógica, debe someterse a las reglas del recto entendimiento, por ser una actividad racional. f) inequívoca, es decir que los hechos analizados lleven a una conclusión certera. g) Coherente, debe existir afinidad, armonía entre todos los elementos analizados.

M) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decidan sobre sus derechos.

Aquí establece el derecho que tiene las personas para impugnar, las resoluciones judiciales que no se encuentra firmes y son susceptibles de rebatir por medio de los recursos establecidos por la ley con el fin de corregirlos o depurarlos.

El derecho a impugnar nace el principio universal de doble instancia consagrado como la forma mas correcta de administrar justicia con el fin de que el afectado por un pronunciamiento judicial, pueda acudir generalmente a una instancia superior solicitando se revea, reconsidere, o reexamine el criterio del inferior antes de que adquiera firmeza de cosa juzgada, en cuyo estado será inalterable.

Se dispone que exista recursos para todos los procedimientos, los mismos que pueden ser administrativos, judiciales o constitucionales.

En los recursos administrativos se impone la facultad de imponer recursos de revisión, apelación, reconsideración, etc. Y que el administrado obtenga otro pronunciamiento de la Administración Pública sobre sus derechos.

En los recursos judiciales todos los fallos, resoluciones o sentencias dictadas por las juezas o jueces deban estar sometidos a recursos horizontales y verticales, para que las partes puedan apelar la decisión del juzgador y como remedio procesal obtener un pronunciamiento por otra u otro administrador de justicia.

Mediante recursos constitucionales los ciudadanos pueden obtener la reparación integral de la vulneración a sus derechos. Estas acciones constitucionales pueden ser dirigidas en contra de actos u omisiones de autoridades públicas no judiciales,

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

personas privadas y sentencia, fallos o resoluciones firmes dictadas por la Administración de Justicia.

HIPOTESIS, PROBLEMAS O TEMÀTICAS.

Se puede asegurar que en varios procedimientos no se respeta el debido proceso, y existe un desconocimiento por parte de los ciudadanos de las garantías básicas que les ofrece la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su capítulo octavo, artículo 76.

Debe existir el suficiente estudio y análisis del Artículo 76, para ser interpretado y ejecutado de una manera óptima por la administración pública, por los magistrados y jueces al estar al servicio de los administrados y justiciables.

Con el respeto al debido proceso se limita el abuso de los Administradores Públicos, de los magistrados y jueces de poder sancionar arbitrariamente. Con ello se alcanzará una recta y cumplida decisión sobre los derechos de los ciudadanos.

Los derechos y garantías que integran el Debido Proceso no pueden considerarse jamás una realidad agotada, si no al contrario todo un sistema dinámico, en constante formación, son piezas necesarias de este; si desaparecen o menguan no hay debido proceso.

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS.

- Selección del tema.
- Consulta de Bibliografía.
- Fichaje.
- Elaboración de las técnicas de recolección de datos.
- Recolección de datos o aplicación de las técnicas.
- Procesamiento de los datos.
- Análisis de la información.
- Redacción del informe.

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

RECURSOS.

Recursos Humanos.

Director: Dr. Manuel Orellana Cabrera.

Asesor: Ab. Iván Valdivieso Siguencia.

Recursos Materiales.

Bienes Inmuebles o infraestructura física.

- Biblioteca de la Universidad Estatal de Cuenca.
- Cuarto de estudios.
- Laboratorio de internet.

Bienes Muebles.

- Computador.
- Laptop TOSHIBA.
- Escritorio.
- Sillas.
- Esferográficos.
- Hojas papel Bon tamaño A4.
- Estantes.
- Libros.
- Memoria Imation.
- Carpetas.
- Diccionarios Jurídicos.

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

PRESUPUESTO

Asesor: Ab. Iván Valdivieso Siguencia.	\$ 50
Internet.	\$ 10
Esferográficos, material didáctico.	\$ 30
Hojas papel Bon tamaño A4.	\$ 1
Carpetas.	\$ 5
Copias	\$ 10
Anillados	\$ 10

Total. 116 dólares.

AUTOR:
WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

CRONOGRAMA.

ACTIVIDADES	Tiempo en meses					
	1	2	3	4	5	6
Consulta de Bibliografía y Fichaje.						
Selección y Elaboración de técnicas						
Recolección de datos						
Procesamiento de datos						
Análisis de datos.						
Redacción del Informe final						

AUTOR:
WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

BIBLIOGRAFIA.

BERNAL Hugo H, El Debido Proceso Disciplinario, Bogotá, Editorial DIKE, 1ª ed. 2001.

CARDENAS RAÚL, "La presunción de inocencia", Editorial Porrúa S:A; 2da edición. Pág. 23, 2006.

CAMARGO Pablo C, El debido proceso, Bogotá, Ediciones Leyer Ltda, 2000.

ECHANDIA Devis, Teoría general del proceso. Tomo i, 1993.

HORACIO Jorge, Revista Iberoamericana de derecho Procesal Garantista, Pág. /, 2008.

IÑAKI Esperanza L, El Principio del Proceso Debido, España, C/Rossello 1ª ed. 1995.

CABANELAS Guillermo T, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 1998.

AUTOR:

WILSON FABIAN VELECELA ESPINOZA.